



Es periodista y Project Coordinator en **Alario Group**, agencia de publicidad ubicada en Chicago y encargada de la campaña publicitaria del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para los medios hispanos en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas.

Desde 1998 ha ejercido su carrera profesional en radio y televisión en España. Ligada desde el inicio al **Grupo Intereconomía**, está especializada en información económica y financiera. Ha trabajado en **Business TV**, donde ha dirigido y presentado el programa de actualidad Hashtag. También en **Radio Intereconomía** como corresponsal financiero en sus servicios informativos.

Eva
Pareja

Licenciada en
periodismo por la
Universidad
Complutense de Madrid



El impacto de la REFORMA MIGRATORIA en la economía de los Estados Unidos

Eva Pareja

E Estados Unidos es conocido por el sobrenombre de *melting pot*, una suerte de crisol de culturas que, a lo largo de los siglos de la historia del país, ha dado forma a una nación que se enorgullece de su acogida al inmigrante y de la posibilidad de que este pueda hacer realidad el tan manido, pero efectista término del sueño americano. La reforma migratoria, la cuarta que se plantea en los últimos treinta años, es, junto con la reforma sanitaria, la gran apuesta presidencial de Barack Obama. Su incumplida promesa de llevarla a cabo en el primero de sus mandatos encuentra ahora más apremio si cabe, aunque también a su vez, más debate y lucha encarnizada entre los dos grandes partidos que conforman el Congreso de los Estados Unidos. En un momento en el que las dudas sobre la recuperación de la economía americana aún persisten, con un crecimiento por debajo del potencial y una tasa de paro reacia a colocarse por debajo del 7 por ciento, el debate migratorio se centra en determinar si su aprobación puede llevarle a ser el aliciente necesario para apuntalar la ansiada vuelta a la normalidad o, por el contrario, un lastre del que la sociedad estadounidense pueda arrepentirse en un futuro no tan lejano como el plazo de diez

años. En consecuencia, la cuestión que se plantea es: ¿qué será mayor el coste de realizar la reforma o limitarla en tiempo y forma? En definitiva, el impacto real del inmigrante en una economía todavía en busca de autor.

1 La reforma migratoria es pro crecimiento

A la hora de centrar la cuestión sobre la reforma migratoria conviene señalar dos aspectos. El primero de ellos es que, de llevarse a cabo en su totalidad, once millones de los considerados en la actualidad indocumentados saldrán a la luz para convertirse a ojos de la ley en legales. El segundo aspecto está relacionado con el envejecimiento de la población estadounidense, que actualmente ronda los 315 millones de habitantes. Un fenómeno del que pocas naciones a nivel global es ajeno y que encuentra en el inmigrante una auténtica tabla de salvación para garantizar el crecimiento y mantenimiento de la sociedad del bienestar tal y como la conocemos ahora.



La reciente historia de Estados Unidos ha vivido, en poco más de 25 años, tres grandes reformas migratorias. La llevada a cabo en 1986 por el entonces presidente Ronald Reagan, regularizó a tres millones de indocumentados, en torno a una cuarta parte del objetivo que se ha marcado Barack Obama con su propia ley. Al republicano Reagan se le atribuyen unas sabias palabras que bien podrían ser aplicadas en el actual tono del debate en el Senado norteamericano.

En diez años la recaudación impositiva se elevaría hasta los 184.000 millones de dólares adicionales, 116.000 millones los ingresaría el gobierno federal y el resto, los ejecutivos estatales y locales



Ex director de la Oficina de Presupuesto del Congreso Douglas Holtz-Eakin.

El cuadragésimo presidente de Estados Unidos afirmó entonces: “Al final del día, la batalla sobre la inmigración no es una cuestión de dólares o centavos. Es una cuestión del alma de una nación”¹. Sin restar valor a los términos expuestos por Ronald Reagan, lo cierto es que, a la hora de equilibrar la balanza entre el impacto económico de la reforma migratoria y su efecto social, el coste se impone. No obstante, determinar la factura final de la ley sobre el presupuesto federal puede ser tan impreciso como atrevido. Sin embargo, los defensores de esta ambiciosa iniciativa legislativa aseguran que su impacto financiero, en especial en el apartado de recaudación fiscal, ascenderá a 200.000 millones de dólares en diez años². Asimismo,

puede ayudar a aliviar uno de los males endémicos de la economía estadounidense como es su déficit fiscal. Si la reforma migratoria se aprueba en su integridad, este déficit, es decir, la diferencia negativa entre los ingresos y gastos del gobierno federal, se vería reducido hasta en 250.000 millones de dólares. Una cantidad nada desdeñable teniendo en cuenta que en el primer mandato de Barack Obama este saldo negativo de la Administración llegó a elevarse hasta el billón de dólares. A esta variable habría que sumar el impacto en la renta per cápita que, de acuerdo con los cálculos realizados por el ex director de la Oficina de Presupuesto del Congreso Douglas Holtz-Eakin, aumentaría en más de 1.500 dólares por habitante³.

El propio texto de reforma elaborado por el Grupo de los Ocho, una comisión de ocho senadores, cuatro republicanos y cuatro demócratas, encargados de gestionar la tramitación de la ley, recoge un cálculo basado en el proceso que deberán seguir los once millones de indocumentados para salir de la sombra de la ilegalidad. De acuerdo con las estimaciones realizadas por este grupo de legisladores y teniendo en cuenta los trece años de periodo tras los cuales podría accederse a la ciudadanía, cada solicitante debe hacer frente a un coste de 5.060 dólares en trámites. El informe concluye que ese montante, multiplicado por once millones de inmigrantes irregulares, aportaría a las arcas del departamento de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos 55.660 millones de dólares.

2 Los beneficios económicos de una completa reforma migratoria

Como en la mayor parte de las regiones del mundo, la economía de Estados Unidos intenta volver a la senda que asegure la prosperidad económica y las oportunidades en un país mundialmente conocido por su capacidad para generarlas. El grupo de expertos Center for American Progress, a favor de una reforma integral de la inmigración, ha elaborado un estudio que pone de relieve las bondades de esta iniciativa legislativa en el plano laboral⁴. Según el informe, el país generaría 203.000 empleos de media cada año hasta completar la regularización en una década. Asimismo, en un periodo de tan solo un lustro, los inmigrantes ganarían un 25 por ciento más que en la actualidad, en torno a 660 millones de dólares más en 2022 frente a los ingresos conseguidos en 2013. En otras palabras, y considerado desde el punto de vista de las arcas

públicas, significa más impuestos federales, estatales y locales. En concreto el estudio concluye que en diez años la recaudación impositiva se elevaría hasta los 184.000 millones de dólares adicionales, 116.000 millones los ingresaría el gobierno federal y el resto, 68.000 millones, los ejecutivos estatales y locales.

No obstante, la mejor y más amplia aproximación al positivo impacto económico de la reforma migratoria la ha realizado el profesor de la Universidad de California (UCLA), Raul Hinojosa-Ojeda⁵. En su estudio, publicado por el Instituto Cato, Hinojosa-Ojeda maneja tres diferentes escenarios: una reforma íntegra, un plan laboral para trabajadores temporales y una deportación masiva. Para el primer supuesto, afirma que la iniciativa legislativa añadiría un billón y medio de dólares al producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos en un periodo de diez años. Esa cantidad incluiría las multas a las que tendrían que hacer frente por el hecho de ser inmigrantes indocumentados así como el coste derivado de un completo análisis sobre sus antecedentes penales. Los 1,5 billones de dólares quedarían reducidos a la mitad si se optara por el segundo supuesto, el del programa laboral temporal pero sin acceso a la ciudadanía. En este caso, el impacto económico se elevaría entorno a 792.000 millones de dólares. Para la última de las variables, la deportación masiva, el importe negativo para el PIB de Estados Unidos llegaría a los 2,6 billones de dólares considerando también el periodo de una década. En estados como California, el más grande del país y uno de los que más flujos migratorios recibe, el efecto económico sería demoledor. California dejaría en el camino 3,6 millones de empleos y su economía perdería 302.000 millones de dólares. En un estado que se ha declarado en bancarrota un escenario como el que se dibuja en el estudio de Hinojosa-Ojeda es a todas luces difícil de encajar.

¹ Citado por Larry Kudlow, asesor económico de la Office of Management and Budget en la Administración Reagan, en un artículo de la *National Review* online bajo el título “Immigration Reform Is Pro-Growth”.

² Lynch, R. and Oakford, P. *The Economic Effects of Granting Legal Status and Citizenship to Undocumented Immigrants*. Center for American Progress. Web. May, 17. 2013.

³ Eakin, D. H. *Immigration Reform, Economic Growth, and the Fiscal Challenge*. Washington, DC: American Action Forum, April 2013.

⁴ Lynch, R. and Oakford, P. *The Economic Effects of Granting Legal Status and Citizenship to Undocumented Immigrants*. Washington, DC: Center for American Progress. Web. March 2013.

⁵ Hinojosa-Ojeda, R. “The Economic Benefits of Comprehensive Immigration Reform”. *Cato Journal*. Vol. 32, No. 1. Instituto Cato, 2012.



Raúl Hinojosa-Ojeda, profesor de la Universidad de California (UCLA).

Para llegar a estos supuestos económicos, el profesor de UCLA ha tomado como referencia la regularización masiva realizada en 1986 por Ronald Reagan que, en un periodo de tres años, permitió que tres millones de inmigrantes alcanzaran la ciudadanía. El principal efecto de la misma, concluye, deriva en un incremento adicional de los salarios para los inmigrantes regularizados del entorno del 15-20 por ciento, lo que, a la postre, supuso mayor consumo y, por ende, mayor crecimiento económico. Es de reseñar que la reforma aplicada durante la administración Reagan se produjo en un momento de recesión y elevado nivel de paro (1990-1991) y, aun así, produjo un impacto económico positivo.

Esta teoría, basada en un modelo estadístico capaz de generar hasta 30.000 ecuaciones diferentes, es cuestionada por los

detractores de la reforma migratoria por considerar que los periodos de tiempo comparados, la década de los ochenta y el periodo actual, reflejan realidades económicas divergentes. Sin embargo, la propia Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) alude a que la fuerza laboral en Estados Unidos se vería incrementada en 3,4 millones de personas como consecuencia de la aprobación de la reforma migratoria⁶. O dicho con otras palabras: más mano de obra legal que potenciaría el consumo, reduciría la necesidad de importar trabajadores y redundaría en menores partidas destinadas al control de fronteras, cuyo coste se ha elevado sobremanera como consecuencia de la inmigración masiva de las últimas décadas. A raíz de la crisis económica iniciada en 2008, los flujos inmigratorios han tornado en una vuelta a los países de origen lo

A raíz de la crisis económica iniciada en 2008, los flujos inmigratorios han tornado en una vuelta a los países de origen lo que ha dificultado el ansiado camino hacia la recuperación económica del país

que ha dificultado el ansiado camino hacia la recuperación económica del país.

Los partidarios de la reforma migratoria se apoyan precisamente en esta premisa para esgrimir un argumento adicional: si la crisis ha dejado una consecuencia es que la reforma de la inmigración ya no tiene que ver con los flujos irregulares provenientes de las fronteras estadounidenses. La mejora de economías como la de México o Guatemala, por ejemplo, han frenado el a priori viaje a ninguna parte del inmigrante indocumentado, puesto que en países como los mencionados las oportunidades laborales alcanzan un estatus que se puede equiparar al americano. En cualquier caso, no conviene soslayar el hecho de que tras el proceso migratorio no solo se encuentra el anhelo y el ansia de un futuro mejor. Dicho proceso lleva implícito un desarraigo para el inmigrante, una frontera más que cruzar, con una nueva cultura y una sociedad muy distinta a la propia, con un futuro incierto por delante. Es un coste social, pero coste al fin y al cabo.

Por concluir este apartado, y para entender la magnitud del proceso, realizaremos un símil entre la regularización de inmigrantes que prepara la Administración Obama con la llevada a cabo en España en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El proceso supuso, según cifras manejadas por el Ministerio de Trabajo, el acceso a la ciudadanía de 670.000 inmigrantes. El coste de la misma ascendió a 1.100 millones de euros. Solo en cotizaciones a la Seguridad Social las arcas del Estado ingresaron 500 millones de euros. A menor escala, la regularización en España tuvo un impacto positivo que, junto a la reagrupación familiar y el boom de la construcción, permitió vivir una de las mejores épocas en el crecimiento económico español. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria nos devolvió a la realidad y sus efectos perdurarán aún durante varios años.

3 *Efecto llamada, carga fiscal insostenible*

Frente a la teoría de los activos defensores de la reforma migratoria, los que reniegan de la misma aducen un argumento siempre esgrimido cuando este asunto copa las portadas de los diarios nacionales y los debates de radio y televisión: una regularización masiva provocará un efecto llamada entre aquellos inmigrantes ilegales que quieran cruzar la frontera. Un efecto llamada que, por otra parte, se convertirá en algo más que una carga para devolver a la economía norteamericana a la senda del crecimiento. Este es el argumento principal empleado por la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana (FAIR⁷, en sus siglas en inglés). Entre los argumentos que emplea para oponerse a la revisión integral del sistema inmigratorio en Estados Unidos, este organismo señala que los inmigrantes irregulares carecen de aptitudes, se conforman con salarios bajos (que son elevados si se comparan con los de sus países

⁶ Congressional Budget Office. Carta dirigida al congresista Paul Ryan, Presidente del Comité Presupuestario del Congreso de los EE.UU. *How CBO Would Analyze the Economic Effects of Proposals to Make Major Changes in Immigration Policy*. Mayo 2013.

⁷ Federation for American Immigration Reform (FAIR). *Immigration, Poverty and Low-Wage Earners: The Harmful Effects of Unskilled Immigrants on American Workers*. Mayo 2011



de origen) y, por lo tanto, no tendrán necesidad de pagar impuestos estatales. Además, afirma que introducirán una competencia insana en el mercado laboral que puede marginar al ciudadano americano por una razón: los menores costes de contratación que supone para el empresario que ofrece un puesto de trabajo al inmigrante.

Estos argumentos, aducidos por igual en cualquier país que lleve a cabo procesos similares, elevan más si cabe la sensibilidad cuando se abordan los programas de bienestar social otorgados por el Estado. El Partido Republicano es el principal valedor de esta postura. Su argumentación queda más clara en una simple y somera sentencia: los inmigrantes que obtengan un estatus provisional no pueden ser un gravamen público, no pueden dejar de pagar impuestos y sí acceder a todos los beneficios sociales. Esa es la línea argumental en la que se resume ser una carga para el gobierno federal. Quienes así se pronuncian ponen nombre y apellidos al impacto económico de una regularización masiva. La administración central tendrá que hacer frente a un coste de 113.000 millones de dólares para garantizar el estado del bienestar de los 11 millones de indocumentados que se ha planteado como objetivo inicial. Una cifra estratosférica que puede alcanzar cotas mayores en la medida en que el inmigrante es mayor “consumidor” de los programas del bienestar que el americano medio. De hecho, una de las grandes disputas del debate migratorio se centra en los subsidios al seguro médico. Los republicanos se oponen e insisten en que debe ser obligatorio adquirir un seguro privado que evite, precisamente, convertirse en un coste adicional con cargo al Estado.

Si los defensores de la reforma empleaban el estudio del profesor Hinojosa-Ojeda, los detractores se reafirman en sus posturas con el estudio realizado por la Fundación Heritage⁸, de carácter conservador. El informe concluye que, de aprobarse la ley con

Heritage reniega del inmigrante que adquiere nuevos derechos, al que considera un ciudadano de bajos recursos económicos y menor capacidad intelectual

carácter integral, el déficit público se dispararía en más de 6.000 millones de dólares a largo plazo. Hay que recordar que en los primeros trece años de la reforma, los inmigrantes que logren la ciudadanía no podrán acceder a ningún subsidio derivado del Estado, por lo que tendrán que recurrir a fórmulas que, en el caso sanitario por ejemplo, implicarán de facto un incremento en la factura médica.

El estudio de la Fundación Heritage basa su estimación en la premisa de que, una vez los inmigrantes irregulares obtengan la nacionalidad, pasarán a ser beneficiarios del sistema, con independencia de que durante el periodo que dura la legalización estén obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias. Bajo esta consideración, el informe calcula que el coste para el Estado central en un periodo de cincuenta años será de 9.400 millones de dólares, con la pensión incluida. En comparación, el organismo conservador sin ánimo de lucro expone que la aportación en forma de impuestos por parte de los “nuevos ciudadanos americanos” apenas será un tercio de la carga que impondrán al Gobierno federal, 3.100 millones de dólares. Es decir, con los números encima de la mesa: Estados Unidos soportaría un déficit fiscal adicional de 6.300 millones de dólares durante la mitad de un siglo por la regularización masiva de indocumentados que se quiere realizar.

En los primeros trece años de la reforma, los inmigrantes que logren la ciudadanía no podrán acceder a ningún subsidio derivado del Estado

No conviene infravalorar la importancia del informe de la Fundación Heritage. Es más, se estima que gracias a la versión que publicó en 2007⁹, fue posible echar por tierra las aspiraciones presidenciales de sacar un texto migratorio adelante. Ese texto, que fue la primera versión del actual, venía a concluir que, de aprobarse la amnistía en los términos propuestos, un inmigrante se vería beneficiado durante su vida con 592.000 dólares en forma de beneficios sociales y gubernamentales. Cantidad que se detraería de la declaración fiscal de cada inmigrante.

En un momento en que la reforma sanitaria está encima de la mesa -y es tan cuestionada como la que traemos a colación-, la posibilidad de que un inmigrante ilegal tenga acceso a ochenta programas sociales diferentes, entre los que destacan Obamacare, Medicare y Seguridad Social, levanta ampollas. De esta manera, como afirma el analista de Heritage, Robert Rector, es una situación que Estados Unidos y su economía no se puede permitir ni ahora ni en el periodo de cálculo de diez lustros¹⁰. Su propuesta es de reforma del sistema de bienestar, aunque este no sea el tema de debate que nos ocupa.

Los críticos a la postura conservadora acusan a la Fundación Heritage de intentar alarmar a la población, cuando la realidad es que la ley migratoria reduciría la carga fiscal de los

indocumentados durante un periodo de 10 años en más de 130.000 millones de dólares, por el mencionado argumento de que se les prohíbe el acceso a los beneficios sociales durante al menos trece años.

Pero el *think tank* va más allá en sus argumentos y para ello pone como ejemplo -en clara respuesta al estudio del profesor de UCLA Hinojosa-Ojeda- los ingresos de los nuevos legalizados. En opinión de Heritage, apenas experimentarán un incremento del cinco por ciento, la mitad o un tercio de lo estimado por informes pro reforma migratoria. A pesar de que la ley de 1986 elevó las rentas del trabajo en un quince por ciento para los inmigrantes amnistiados, la Fundación estima que dicha cifra es ahora una cota muy difícil de alcanzar. Considerando los gastos e impuestos gubernamentales y el nivel de estudios de los aspirantes a la ciudadanía, la conclusión a la que llega es que es imposible que el montante de sus ingresos por sus obligaciones fiscales compense el importe en forma de beneficios sociales que obtendrán una vez se conviertan en ciudadanos americanos. Heritage reniega, por tanto, del inmigrante que adquiere nuevos derechos, al que considera, tanto ahora como en el futuro, un ciudadano de bajos recursos económicos y menor capacidad intelectual.

4

¿Reforma o control de fronteras?

El debate sobre la reforma migratoria se reduce a un mero intercambio maniqueo de pareceres sobre la necesidad o no de realizarla. Sin embargo, hay una cuestión que es si acaso más relevante y a veces cae en el olvido: ¿cuál es el coste económico de no aprobar una reforma integral en materia de inmigración?

Es, llegados a este punto, cuando entra en juego una de las facturas económicas que afronta anualmente la Administración Obama y

⁸ Rector, R. and Richwine, J. *The Fiscal Cost of Unlawful Immigrants and Amnesty to the U.S. Taxpayer*. Special Report. Heritage Foundation. Web. Mayo 2013.

⁹ Meese III, E. and Spalding, M. *Where We Stand: Essential Requirements for Immigration Reform*. Heritage Foundation. Mayo 2007.

¹⁰ Rector, R. and Richwine, J. *The Fiscal Cost of Unlawful Immigrants and Amnesty to the U.S. Taxpayer*. Special Report. Heritage Foundation. Web. Mayo 2013.



que tiene fiel reflejo en el presupuesto federal. El gobierno de Estados Unidos gastó 11.700 millones de dólares en 2012 para garantizar la seguridad en la frontera con México, más que ninguno de sus predecesores, según datos aportados por el Migration Policy Institute¹¹. Ese montante podría llevar a pensar que los inmigrantes ilegales se agolpan a lo largo y ancho de las 2.000 millas construidas a lo largo del desierto de Texas y California, pero la realidad es completamente distinta. De hecho, la inmigración neta entre Estados Unidos y México fue en el ejercicio pasado cero: 150.000 inmigrantes cruzaron la frontera de manera legal o ilegal y esa misma cifra regresó a su país de origen. La conclusión a la que puede llegarse, por tanto, es que la frontera es ahora más segura que años atrás. Esa es la retórica demócrata que los republicanos no comparten. Es más, su apuesta es clara y decidida en este sentido: no habrá acuerdo para la reforma migratoria a menos que se asegure en su totalidad la frontera con México en el plazo de seis meses. El objetivo inicial establecido por el gobierno de George Walker Bush establecía que el aseguramiento de la frontera estaría plenamente operativo en 2011. El retraso de la implementación de la tecnología necesaria para llevar a cabo una vigilancia de los movimientos ilegales migratorios ha supuesto en dos años 14.700 millones de dólares. A esta cantidad hay que incorporar los 1.000 millones de dólares añadidos a los que ha hecho frente el contribuyente estadounidense para la adquisición de la tecnología necesaria para reforzar el control de fronteras. Una gran cantidad de dinero para apenas proteger 85 kilómetros con resultados cuestionables.

En el debate del Grupo de los Ocho, las posturas son tan extremas acerca de este punto que amenazan con descarrilar, una vez más, una de las mayores iniciativas que un presidente de Estados Unidos puede plantear. Los conservadores no consideran ninguna propuesta migratoria a menos que se

Basta con observar las cifras del periodo comprendido entre las décadas veinte y ochenta del siglo XVIII. Solo en esos sesenta años, quince millones de inmigrantes se asentaron en tierras americanas

incrementalmente sobremanera la inversión para sellar al cien por cien la frontera con México. La cuestión planteada no es baladí, sobre todo, con unas arcas públicas ahogadas en gastos armamentísticos y beneficios sociales. Garantizar en su totalidad la frontera supondría un coste extra de 28.000 millones de dólares al año, o lo que es lo mismo, el presupuesto anual del Departamento de Justicia. Más carga para el bolsillo del contribuyente que lastraría con semejante factura hasta 2019, fecha para la que se estima podría lograrse el objetivo planteado por los republicanos. Un suma y sigue constante si se tiene en cuenta que en el periodo comprendido entre 2000 y 2010 los americanos han invertido 90.000 millones de dólares en asegurar la frontera mexicana. En este punto, se podría avalar la utilidad de este ingente gasto teniendo en cuenta que el número de ilegales que cruzó la frontera en 2000 era de 1,6 millones y una década más tarde se había reducido a apenas 463.000. Sin embargo, hay que precisar que tan solo un 44 por ciento de la línea geográfica que separa Estados Unidos de su vecino del sur opera con totalidad. Es decir, que 90.000 millones de euros para reforzar la mitad de la frontera puede traducirse en una lectura negativa de los esfuerzos por controlar la

inmigración ilegal. Los defensores de semejante inversión apuntan, por su parte, que carece de consistencia cuestionar su uso puesto que en diez años se ha gastado menos que en un solo ejercicio, por ejemplo, el Ministerio de Defensa para financiar el presupuesto de los conflictos internacionales en los que está presente Estados Unidos. Como muestra, en cuatro meses en la guerra de Irak se emplearon 90.000 millones de dólares.

5 *Una oportunidad entre mil*

El coste beneficio/oportunidad debería ser la variable para determinar el impacto económico de una reforma de la inmigración, con independencia del país en el que se ponga en práctica. Es incuestionable que no ha sido ni será nunca sencillo, máxime cuando la polémica sobrevuela siempre sobre una de las células propias de la sociedad americana. Sin inmigración, no existiría Estados Unidos tal y como se conoce en la actualidad. Durante cuatrocientos años, millones de personas, originariamente irlandesas, arribaban en la costa este del país, en la archiconocida Ellis Island, que alberga la Estatua de la Libertad, en busca del Nuevo Mundo. Un proceso que, para comprender plenamente su magnitud, basta con observar las cifras del periodo comprendido entre las décadas veinte y ochenta del siglo XVIII. Solo en esos sesenta años, quince millones de inmigrantes se asentaron en tierras americanas, especialmente en el medio oeste y el noreste del país.

Los inmigrantes indocumentados tienen ante sí de nuevo una oportunidad sin igual para enriquecer un Estado tan ecléctico culturalmente hablando, como rico en recursos y abierto a una realidad que, aunque generadora de recelos al inicio, torna en alimento indispensable a la hora de analizar a esta nación en su conjunto.

En 1987, el que fuera ministro de Vivienda en la Administración de George Bush padre, Jack Kemp, pronunció una conferencia ante la Liga de los Ciudadanos Unidos de América Latina. En su discurso Kemp dijo: “La oportunidad es mágica. La inmigración, basada en sueños y esperanzas para el futuro, ha enriquecido nuestro país, creando una abundancia imposible de medir para América¹²”. Definitivamente, la expresión imposible de medir para América es la que mejor define el impacto económico de la reforma migratoria, porque más allá de cada dólar y cada centavo está la esencia misma, el alma de Estados Unidos: un ADN que en 2050 estará conformado, por ejemplo, por 132 millones de hispanos. Estados Unidos vuelve a ponerse a prueba en una materia que ha marcado a fuego su existencia actual. La clave para determinar el impacto económico de la ley migratoria dependerá de la profundidad de los acuerdos que se alcancen en Capitol Hill. El tema no es menor, a pesar de que solo un 51 por ciento de los americanos cree esencial que el presidente de Estados Unidos y el Congreso aprueben la norma este mismo año. Aunque la sociedad estadounidense ve en la reducción del déficit fiscal una cuestión de más calado y de más inmediata solución, no hay que olvidar que ambos aspectos están íntimamente ligados. En la medida en que se reduzca el presupuesto destinado a luchar contra la inmigración ilegal, especialmente por el lado de la seguridad de la frontera sur, la aportación de esta partida al desequilibrio de las cuentas del gobierno federal será también menor. La aportación de una inmigración legal, más preparada que la generación anterior, contribuirá, por su lado, a hacer de Estados Unidos una región con un horizonte más amplio y despejado. Es el alma del país lo que está en juego, es su historia y sus valores. Es, en definitiva, un crisol enriquecido por siglos de integración cultural y social. Solo así se entiende la idiosincrasia de la sociedad americana, su pasado, su presente y su futuro.

¹¹ Doris Meissner Senior Fellow and Director, U.S. Immigration Policy Program Migration Policy Institute Border Security: *Measuring the Progress and Addressing the Challenges*. Testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los EE.UU. Marzo 2013.

¹² Jack Kemp, Housing Secretary en la Administración de George H. Bush. Discurso ante la League of United Latin American Citizens. 25 de junio de 1987